

sector popular, aunque después les facilitó apoyo y ayuda), fue tal vez la causa de su rápida desintegración, una vez pasada la fase de crisis del desastre en general. Iniciada como una respuesta inmediata a la emergencia, no dejó de encerrar, desde el comienzo, un embrión de su posible función en posteriores fases de reconstrucción y en combatir el histórico abandono en que estaba inmersa la Región Atlántica. Comprobada su eficacia y eficiencia en cerrar las filas de un grupo heterogéneo y dispar de organizaciones en la atención de la emergencia, pareciera ser, de acuerdo con algunos observadores, que la noción de continuidad tomaba más fuerza; y la posibilidad de construir una nueva organización "provincial", multisectorial para reivindicar el desarrollo futuro de la región, se perfilaba en la mente de algunos de los líderes populares.

Frente a este contexto, la armonía y la disciplina que había tipificado su accionar anterior comenzó a disiparse frente a las exigencias de distintos sectores para una mayor cuota de poder y acceso a recursos. El liderazgo de la FETRAL y lo que algunos han interpretado como su búsqueda de opciones de restablecer su hegemonía sobre el movimiento popular en Limón, entró en contradicción con los anhelos y reticencias de otros grupos. De hecho, al principio de la formación de la Comisión, discrepancias con las formas de toma de decisión habían llevado a que la abandonaran algunas organizaciones en búsqueda de mantener el liderazgo provincial y cuya relación histórica y coyuntural con FETRAL había sido antagónica. Este fue el caso de la Coordinadora Campesina del Atlántico y la Asociación Nacional de Vivienda-Limón, cuyo retiro suscitó que sus "aliados" naturales, la Coordinadora de Barrios (San José) y la Asociación "Vecinos", abandonaran la CPSJ.

La tensión interna, a nivel de la Comisión, fue indirectamente alimentada por las ayudas preferenciales que algunas instituciones gubernamentales proferían a ciertos miembros de ella. En fin, después de un mes, la CPL se había desintegrado, producto de las mismas divisiones y aspiraciones desiguales entre sus miembros que habían sellado y debilitado el desarrollo del movimiento popular en la región desde hacía unos años. El gobierno nacional, que no podía haber visto con buenos ojos el posible desarrollo de una alternativa popular organizada, no tuvo que tomar mayores medidas para desintegrarla. Como sucedería más tarde con otras iniciativas, en la "fase" de reconstrucción, el mismo movimiento popular se encargaría de la imposibilidad de construir una alternativa viable. La CPSJ sufrió una similar desintegración pasada la emergencia y entrada la búsqueda de alternativas de apoyo a la reconstrucción.

Con la desintegración de las dos Comisiones se perdió una oportunidad de crear un espacio de deliberación y de postulación colectiva de esquemas para las labores de reconstrucción y desarrollo que pudiera haber presentado un contrapeso al proceso que se dio, dominado por un énfasis "estructural" dirigido a los sectores de avanzada de la provincia.

La Comisión Permanente de Emergencia y Reconstrucción de Talamanca

La zona sur de Talamanca constituye un espacio claramente diferenciado de la provincia de Limón, en términos productivos, sociales, culturales y étnicos. La más inaccesible de las subzonas de la provincia, combina la economía de pequeña escala con un pequeño pero expansivo sector bananero-monopólico en Sixaola. Un tipo de tierra de nadie en cuanto a la presencia estatal, su dinámica y búsqueda de desarrollo se reparte entre las agrupaciones u

organizaciones étnicas (negra e indígena), una presencia importante de ONGs y la Compañía Bananera.

La falta de una presencia estatal importante significaba que las funciones de socorro de los organismos estatales, con remesas por aire (helicópteros) y mar (a Puerto Viejo), tendrían que tener obligatoriamente como intermediarios a organizaciones locales, municipales, comunales y no gubernamentales.

Uno de los intermediarios más importantes en la zona era la Asociación Nacional de Asuntos Indígenas (ANAI), una ONG de origen norteamericano, con casi diez años de trabajar en la zona y dotada de grandes recursos financieros, materiales y de transporte. Además, tenía una extendida red de empleados ubicados en los pueblos de la zona. Comprendía la instancia "exógena" más importante de la zona, trabajando particularmente con las poblaciones indígenas en la promoción de proyectos productivos, esquemas de ecodesarrollo, organización local, etc.

La ANAI, utilizando sus recursos logísticos, transportes y organización local servía para la distribución del socorro propio (por donaciones) y de instancias como la CNE, AID-OFDA, etc. Entre este socorro se incluía la distribución de gasolina, tan crítico para el transporte de bienes y el funcionamiento de diversas herramientas.

La ANAI, descrita por varios sectores antagónicos como institución "foránea", económicamente fuerte y con "poder de compra" de influencias zonales, ha sido blanco de diversas críticas por muchas organizaciones y líderes locales, incluyendo CODERIWAK, la Confederación de Asociaciones indígenas más importante de la zona. Teñida de "neocolonial", varias organizaciones han intentado restarle influencia, creando bases alternativas, "autóctonas", de trabajo con las comunidades locales del Alto y Bajo Talamanca y de la franja costera. Lo que parece haber sido una eficiente labor de distribución del socorro llevado a cabo por ANAI, la cual fue tildada de "parcial" y "preferencial" a sus adeptos, por algunos sectores, solamente sirvió para resucitar o reanimar las rivalidades o competencias "institucionales" zonales.

Así, a un mes del sismo, el 19 de mayo, por iniciativa de una ONG nacional "alternativa", la Fundación Guilombé, y, en algún grado, en respuesta al trabajo de ANAI, se forma, con la presencia de representantes de 35 pueblos o colectividades, la Comisión Permanente de Emergencia y Reconstrucción de Talamanca. Se nombra un Comité Ejecutivo y para su fiscalización al cura católico de Bribri. Esta importante presencia de la Iglesia (que ya comentamos en el caso de la CPL) también fue repetida en el impulso y organización que dieron los curas católicos locales en la Comisión de Emergencias del Valle de la Estrella, en el sector norte del cantón de Talamanca.

Durante los siguientes meses la Comisión Permanente logró una eficiente distribución de ayuda entre las poblaciones de la zona, restando influencia a la ANAI y, a pesar de una temprana reticencia de la CNE de reconocer una Comisión que no fuera oficial-gubernamental, fue utilizada por esta en la entrega de socorro. Con relación a la Comisión, que se proyectaba hacia la "fase reconstrucción", esta perduró solamente hasta finales de 1991, lo cual se explica por la falta de un apoyo mínimo financiero de organismos nacionales e internacionales que hubiera permitido

que sus directivos claves se dedicaran a las tareas de organización y promoción de las posibles actividades de la Comisión.

En consecuencia, una tercera opción de una respuesta colectiva y organizada a las tareas de reconstrucción "popular" corrió la misma fortuna que la CPL y la CPSJ. Esto, como veremos más adelante, significaba que cualquier opción de reconstrucción en la provincia impulsada desde las ONGs, grupos de base u otras organizaciones de la sociedad civil, tomaría la forma de esfuerzos individuales y aislados, juntando componentes de las organizaciones presentes de acuerdo con el esquema o zona/localidad involucrada, y la capacidad de las organizaciones en la negociación/gestión de esquemas frente a las fuentes de ayuda financiera disponibles

La existencia de la Comisión hasta finales del año, resalta un aspecto importante en términos de la conceptualización o el "imaginario" de los desastres y las "fases" tradicionales en las cuales se dividen. Así, la Comisión fue involucrada en la distribución de ayuda de "emergencia" durante meses, a pesar de que la "fase de emergencia" fue oficialmente cerrada el 1 de mayo de 1991 (aún antes de la formación de la Comisión de Talamanca). En adición al asunto de que la zona entró en una nueva emergencia en agosto a raíz del impacto de las inundaciones, de hecho no había salido de la "emergencia" anterior. Así, el impacto del sismo (y de las inundaciones) en los cultivos y en las posibilidades de la comercialización de los excedentes agrícolas de la zona (lo cual fue complicado por la falta de acceso, debido al mal estado de los caminos locales), significaba que la población requería apoyo alimentario durante un largo periodo de 1991. La "normalización" mucho más temprana del comercio y el empleo en Limón y el Valle de la Estrella establecía una diferencia cualitativa con el contexto en el sur. Así, "emergencia", "rehabilitación" y "reconstrucción" formaban un continuum en lugar de representar casillas autónomas. Hasta los proyectos de reconstrucción de vivienda llevados a cabo en 1991 y 1992, que veremos más adelante, la ayuda alimentaria a los pobladores fue un factor crítico para permitir a los pobladores dedicar tiempo a la autorreconstrucción.

Más allá de su papel en la organización popular de la respuesta a la "emergencia" en Talamanca, la Comisión, o algunos de sus miembros jugaban un papel importante en la conservación de la base de existencia y la "autonomía" de diversos pobladores de la zona. La destrucción de los escasos medios de vida de muchos pobladores exponía a algunos a la imposibilidad de hacer frente a obligaciones en el pago de créditos concedidos con anterioridad, o de mantener a sus familias. Es en este contexto que las compañías bananeras presionan por comprar las tierras campesinas, para así aumentar su reserva territorial y hacer aun más proletaria a la población regional. La Comisión logró ayudar a detener este proceso en alguna medida, aunque no fue posible en todos los casos. Las conclusiones que derivan de este proceso son claras en cuanto a la discusión sobre los "beneficiarios" y los "perdedores" en los desastres y los aspectos importantes de considerar en cuanto al impulso de esquemas de rehabilitación y reconstrucción socialmente equitativos.

La Comisión del Cabildo Abierto: Opciones para la Negociación Regional de la Reconstrucción con el Gobierno

Desde el principio de las actividades de rehabilitación y reconstrucción, quedó claro un sello gubernamental (con el apoyo del gran financiamiento internacional) a favor de la infraestructura básica y las instalaciones más ligadas al funcionamiento de la economía *nacional* y los sectores de punta (bananeros, puerto, refinería, etc.). Este énfasis fue comentado, criticado y rebatido por varios sectores regionales de ciudad y campo durante los primeros meses después del sismo, incluyendo los sindicatos, la jerarquía católica y las agrupaciones campesinas. A un mes del sismo hubo fuertes enfrentamientos verbales entre representantes locales y miembros del gobierno, referentes al olvido o atraso en la rehabilitación "social" de la zona, y la preferencia dada al eje moderno de desarrollo entre Siquirres y Limón y a las zonas bananeras. Desde temprano en el desenvolvimiento del escenario existía una tensión entre la "actitud" gubernamental, de enfocar su atención a la reconstrucción de lo dañado por el sismo, y el reclamo de diversos sectores regionales para una atención a la resolución de los "problemas históricos" de la región Atlántica.

A la luz de la publicación del Plan Regulador de la Reconstrucción en mayo, los sesgos identificados en las labores de reconstrucción y la ausencia de un contrapeso negociador de la región, entre otros, se gestó la celebración de un Cabildo Abierto de la Municipalidad de Limón a fines de agosto de 1991 y el nombramiento de una Comisión (negociadora) en su representación. Aquí es interesante notar que si bien la Municipalidad constituye un componente de la estructura del gobierno de turno (Social Cristiano), su identificación con la población local en Limón lo dota de una función de contrapeso del nivel nacional. Esta representación o identidad local lo dotaba de una capacidad potencial de aglutinar distintos sectores sociales de Limón en pro de la búsqueda del desarrollo y la reconstrucción regional.

A pesar de esta potencialidad, el ser parte de la Comisión del Cabildo suscitó serios problemas en lo que se refiere a la "representación local" y, por su composición antagónica al gobierno nacional, no tuvo gran acogida o aceptación en ese nivel. Mientras varios sectores locales fuertes, como es la FETRAL, criticaba su composición, acusando a algunos de sus miembros de "politiquería" y del uso de la Comisión para fines de ascenso político partidista personal²⁹, el gobierno por su parte, lo veía como un frente antagónico que favorecía la técnica de choque encima de la negociación, y que buscaba confundir el problema de la reconstrucción con la resolución de los problemas históricos de la región Atlántica.

El acto más prominente de la Comisión del Cabildo fue la organización de un bloqueo de carreteras y calles en Limón y un paro comercial durante la tercera semana de octubre,

²⁹ En mayo de 1993 varios de los impulsores de la Comisión, de hecho, se perfilaban entre los protagonistas de la tendencia presidencial de José María Figueres, del Partido de Oposición, Liberación Nacional, y aspiraban a diputaciones en la Asamblea Nacional

acompañado por la amenaza de un paro o huelga general si el gobierno no accedía a presentarse y negociar soluciones en común. La Comisión se quejaba de que los representantes de la Comisión Coordinadora Institucional, establecida por el gobierno para dirigir la reconstrucción y con quienes se había negociado anteriormente, eran funcionarios de rango intermedio sin poder de decisión. Frente a las demandas de la Comisión y a pesar de su falta de amplia representatividad local, el gobierno accedió a las negociaciones haciéndose presente el 22 de octubre con el ministro de la presidencia y un amplio elenco de ministros, viceministros y presidentes ejecutivos de organismos autónomos. Las negociaciones condujeron a la formación de comisiones de trabajo por sectores o problemas, los cuales trabajaron hasta mediados de noviembre, momento en que se firmaron conjuntamente los acuerdos tomados.

A pesar de esto, la ilegitimidad de la Comisión entre muchos sectores locales, efectivamente significaba su paulatina desaparición desde este momento en adelante. De hecho algunos sugieren que el gobierno realmente negoció con FETRAL y no con la Comisión y sus representantes. Esta idea se consolida al considerar que la Comisión es reemplazada como ente negociador desde 1992 en adelante por una nueva Comisión integrada, algo contradictoriamente, por la FETRAL (sindical), la Cámara de Exportadores del Banano (CADEXO) y la Municipalidad.

En suma, otra vez en la historia organizativa de Limón las divisiones e intereses divergentes de distintos grupos locales impide la formación de un bloque único de negociación regional para hacer frente colectivamente al gobierno nacional. Este último no tiene que desempeñarse en mayor medida para desarticular cualquier conformación potencialmente problemática para la "paz" y continuidad social en esta región periférica.

El resultado final es la reaparición "protagónica" de la FETRAL, en consonancia con los empleadores bananeros en un medio donde el liderazgo y formas de operar de ambos son seriamente cuestionados por diversos sectores sociales locales. La región se encontró con su propia realidad y una incapacidad de construir alternativas organizativas, reivindicativas o de presión, que reflejaba la diversidad de nuevos sectores y de demandas existentes.

Frente a esta situación, la "reconstrucción popular", de cara a la "oficial", va a reducirse a una serie de actividades desarticuladas o individuales promovidas por aquellas organizaciones no gubernamentales u otras instituciones de la sociedad civil (de base, eclesiales, etc.), con poder de convocatoria y de acceso a recursos a través de aquellas instituciones internacionales de financiamiento simpatizantes con sus enfoques y formas de concepción de la problemática social y económica regional.

El módulo "oficial" de reconstrucción, orientado hacia los segmentos "nacionales" de la economía regional (aquellos sectores de interés nacional), visto en función del eficiente desenvolvimiento de la economía, se acompañará por un modelo alternativo fragmentado que no puede generalizarse, para rescatar los intereses de un desarrollo regional "autóctono", elaborado en función de la masa de la población afectada (campesina, indígena y marginal urbana, en particular).

La Reconstrucción a través de las Instituciones de la Sociedad Civil

El sismo de Limón y las inundaciones revelaron tanto la vulnerabilidad "infraestructural" como la económica y social de la región, reflejada ésta en los daños en la producción, economía familiar de los pequeños productores o comerciantes, y la fragilidad de los sistemas no diversificados y marginales. Entre los aspectos "infraestructurales", los daños en la vivienda popular fue notorio, y esto no tanto por la intensidad del sismo, sino por la condición precaria de muchas unidades anterior al mismo. En sí, el sismo fue "visto" como una opción de tener acceso a una vivienda mejor, situación incitada por las supuestas amplias perspectivas de acceso a crédito que el gobierno y sus instituciones anunciaba en las postrimerías del evento. De hecho, numerosos casos fueron "reportados" de pobladores "destruyendo" sus propias casas, o terminando la destrucción que la naturaleza había iniciado, en la esperanza de tener acceso a una nueva

Gran parte de la actividad de reconstrucción gestada o impulsada por las organizaciones de la sociedad civil va a dirigirse finalmente hacia el sector de vivienda, o sea, hacia un modelo infraestructural. Mientras esto se acompañe por intentos de entrar en el área de la reactivación o diversificación económica poco avance se habrá logrado en este sentido.

El énfasis en la vivienda se puede explicar por varios factores. Primero, la demanda real, la urgencia de resolución y el valor existencial de la vivienda. Este factor se acentúa por la existencia de grandes sectores de la población efectivamente "excluidos" de los sistemas formales, gubernamentales de acceso a crédito por razones de sus magros ingresos, su ocupación no regulada o "ilegal" de la tierra y lo oneroso de los trámites a seguir. El prometido "bono gratuito" de vivienda no tuvo gran agilidad en su ejecución. Un ejemplo de estas dificultades se ve en el intento de una ONG -la Asociación Cristiana de Jóvenes- de facilitar los trámites de vivienda de los pobladores a través de la reproducción de unos 8.000 machotes y su distribución entre las familias de la región, y el ofrecimiento de asesorías para los trámites de solicitud a las instituciones gubernamentales. Se estima que algo menos de un 10% de los trámites tuvieron éxito.

Un segundo factor sería el tipo de organización existente y su experiencia, y el tipo de financiamiento concedido por las fuentes internacionales, que tuvo una importante orientación hacia la vivienda y no a la producción.

La suma de los modelos institucionales desplegados en la reconstrucción de viviendas es ilustrativa de las opciones existentes. A pesar de las diferencias "operacionales" existentes en la población objetivo de los esquemas, en los sistemas constructivos, etc. la mayoría de los esquemas más ambiciosos se realizaban en colaboración y concertación con distintas organizaciones locales o de base.

Los dos esquemas más difundidos fueron impulsados por ONGs de vivienda, ya existentes y con amplios antecedentes en Limón y su región: la Fundación Costa Rica-Canadá de Vivienda Rural y la Fundación Promotora de la Vivienda (FUPROVI). Ambos trabajaron con fondos de Emergencia asignados por sus fuentes regulares de financiamiento. En el primer caso, fuentes del gobierno de Canadá y en el segundo, la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional (ASDI) y

Diakonía, de Suecia. La comparación de ambos casos ilustra varios factores contrastivos de método y decisión.

La Fundación Costa Rica-Canadá tiene una relativa larga historia de promoción de vivienda rural de alta calidad técnica en el país. Aún con anterioridad al sismo había impulsado la construcción de más de 700 unidades en la región Atlántica, de las cuales solamente cuatro sufrieron daños mayores con el sismo. La naturaleza de la institución y sus lazos cercanos con el gobierno, a pesar de su carácter de ONG, significaba una relación estrecha con la "coordinación" gubernamental de la reconstrucción de vivienda. A raíz de esta coordinación es que la Fundación optó por el impulso de la reconstrucción predominantemente en una zona, el cantón de Matina, cercano a la ciudad de Limón, incluyendo los poblados de Matina, Bataán, Estrada y Zent, donde el sismo tuvo sus mayores impactos relativos en términos de los daños a la vivienda. En esta selección territorial (junto con otras zonas en Turrialba) también primaba un concepto de "visibilidad" de la actividad, factor de importancia para los donantes. Así, hasta la fecha se había impulsado la construcción de 157 nuevas casas en un área territorial restringida.

Otro criterio de selección de zona y población objeto se refiere a la solvencia económica tanto en términos de la economía local como de los pobladores mismos. Las experiencias anteriores de la Fundación con la reconstrucción de vivienda después del Huracán Juana en Ciudad Cortés (zona sur oeste del país) mostraba las dificultades de la promoción de esquemas en zonas de poco dinamismo económico y con pobladores sin capacidad de pago. En este sentido, el esquema de la Fundación después del sismo, representó un enfoque "elitista" dentro de los sectores populares afectados.

La asignación de créditos y la administración general del proyecto se realizaba a través de organizaciones locales, principalmente asociaciones de desarrollo y cooperativas. Los montos de los créditos fueron altos en comparación con la norma para la región pos-sismo (hasta 750.000 colones, casi US \$7.000), cargaban tasas de interés consonantes con los niveles nacionales y reembolsables en el mediano plazo.

Los sistemas de construcción y los materiales fueron escogidos por el poblador, y el trabajo de levantamiento de las casas realizado de forma formal, o sea por "compañías" o artesanos constructores y no por sistemas de autoconstrucción. La Fundación prestaba asesoría técnica garantizando la calidad y sismorresistencia de las unidades.

El caso de FUPROVI marca importantes diferencias con referencia a la Fundación. Esta institución ya tenía tradición de trabajo con los barrios populares de la ciudad de Limón, en particular, fomentando la vivienda a través de créditos reembolsables y utilizando sistemas de autoconstrucción.

Con el sismo, la opción más atractiva, por razones de costo, experiencia y capacidad administrativa, hubiese sido la atención al problema de la vivienda en la misma ciudad de Limón. Sin embargo, la demanda para los créditos de FUPROVI en esta zona fueron al principio, limitadas. Esto se explicaba por la percepción de la población de un acceso preferencial a créditos

gubernamentales de más bajos intereses o "bonos gratuitos", incitado por la misma propaganda oficial pos-sismo.

Esta situación "obligaba" a FUPROVI durante el primer año después del sismo, a abrir sus perspectivas hacia la zona rural, al sur de la ciudad en particular, saliendo de sus zonas tradicionales de acción. Era solamente después, con la desilusión de los pobladores urbanos y la no concreción generalizada de la prometida ayuda estatal, que la institución "volvía" a la zona de Limón promoviendo construcción y reparaciones en los barrios populares de Limoncito, Cieneguita, Envaco, etc.

Inclusivo en la zona rural, FUPROVI buscaba dar preferencia a esquemas "concentrados" en términos territoriales y no soluciones individuales y dispersas que hubieran dificultado los procesos y aumentado los costos de administración y control. Además, fue crítica la participación de varias organizaciones de base en la gestión y administración de los proyectos impulsados. Dos de sus más importantes líneas de cooperación se desarrollaban en los poblados de San Andrés y Río Banano, en el Valle de la Estrella, al sur de la ciudad de Limón, las cuales ilustran eficazmente sus formas de operación. Así, trabajando en coordinación con organizaciones de base campesina de las localidades (la Coordinadora Campesina y la Unión de Pequeños Agricultores de Limón), quienes se encargan de la selección de los beneficiarios y de la coordinación y organización comunal de la construcción, FUPROVI concedió créditos reembolsables para la compra de materiales. Las casas fueron levantadas por sistemas de autoconstrucción con ayudas interfamiliares.

En el caso de Río Banano, el esquema fue coauspiciado por el Consejo de Iglesias para las Emergencias y Reconstrucción (CIPER), una organización ecuménica protestante interdenominacional que proporcionaba ayuda con materiales y alimentación familiar para permitir la dedicación de las familias a las tareas de construcción (ver siguiente sección).

Esta forma de gestión multiorganizacional tipificaba a las actividades de FUPROVI, dirigida a los grupos más pobres de pobladores y a través de las cuales contribuyó en la construcción de más de 200 viviendas. Para ampliar la base financiera del fondo de Emergencia, FUPROVI negoció la concesión de "bonos gratuitos" gubernamentales con base en las viviendas construidas, fondos que se reintegrarían a un fondo rotativo de crédito. Hasta 1993 (enero) se habían entregado unos 36 "bonos" familiares en lugar de viviendas terminadas.

La forma de cogestión y participación local en el financiamiento y construcción de viviendas utilizando esta vez fondos reembolsables, fue utilizado también en esquemas fomentados por varias ONGs sin antecedentes en el campo de la vivienda. Así, CECADE, en concertación con APDE y la Coordinadora Campesina del Atlántico y la Asociación de Desarrollo de Cuba Creek como contrapartes locales, obtuvieron financiamiento del Gobierno de Dinamarca para la construcción de 25 viviendas en los poblados de Peje, Cuba Creek, Las Brisas y Quito al oeste de Limón ciudad.

El esquema también se orientó como un proyecto productivo dirigido a impulsar el desarrollo económico de la zona. Esto a través de la reinversión de los "bonos de vivienda" que los

pobladores recibieron del gobierno con base en la nueva casa, y a ser administrado a través de un fondo rotativo de crédito.

El proyecto de vivienda enfrentó problemas en sus inicios a raíz de la temprana resistencia de una de las ONGs a incluir a las organizaciones de base en el comité directivo del proyecto, a pesar de que ellos habían hecho la evaluación de necesidades y la selección de beneficiarios, argumentando su falta de profesionales para emprender tareas de dirección.

Esta decisión fue revertida, bajo presión, pero condujo a la pérdida de varios meses para dar inicio al proyecto, aumento de costos y la necesidad de cambiar los planes originales de realizar la construcción en bambú, a través del Programa Nacional de Bambú, para terminar utilizando materiales industriales de construcción. Este proceso trae a colación algunos de los problemas que pueden surgir en la relación ONGs-organizaciones de base, cuando a estos últimos no se les concede plenos derechos de participación en el proceso de gestión, control y toma de decisiones.

Múltiples otros esquemas de construcción fueron impulsados con éxito en la región, que no son posibles de comentar en detalle, pero que mostraron la eficacia de métodos coparticipativos con base en el uso de recursos locales (humanos y materiales). Esto fue particularmente evidente en las zonas indígenas del Alto y Bajo Talamanca y de Chirripó/Turrialba, donde la Fundación Gulombé, en colaboración con CIPER, las Asociaciones Indígenas y las iglesias, fomentaron esquemas utilizando maderas locales, bancos de materiales, trabajo comunitario y "técnicos" locales, proveyendo de diversos modos asistencia financiera, técnica, materiales, herramientas (motosierras, por ejemplo).

Las instituciones y organizaciones eclesiales

Como hemos apuntado con anterioridad, la Región Atlántica se distingue por una fuerte presencia tanto de la Iglesia Católica como de las iglesias protestantes históricas. Un símbolo de su presencia y el respeto que merecen entre la población fue reflejado en su diversa representación en las Comisiones Populares de Emergencia de la provincia.

La mayoría de las iglesias protestantes históricas trabajaron de forma coordinada con otras instancias eclesiales o populares, particularmente con CIPER (ver abajo), tanto en la atención de la emergencia como en la reconstrucción.

La Iglesia Católica, de concepción avanzada en el país, trabajó más bien de forma independiente, canalizando los propios recursos de la Diócesis de Limón y de CARITAS, vía sus parroquias y curas locales, para la emergencia y la reconstrucción. Sin embargo, hubo casos importantes de colaboración interecuménica entre la Iglesia Católica y las iglesias protestantes, particularmente con la Luterana costarricense, la cual, por razones de cercanía ideológica y jerarquía, no despliega antagonismos históricos o ideológicos con aquella. No fue así con el Estado, con quien la Iglesia Católica se negaba a colaborar por varias razones, incluyendo lo "político" de las acciones gubernamentales y su tradicional apoyo a las grandes compañías bananeras, las cuales

habían sido frente de ataque tradicional de la "Iglesia de los pobres", propulsada por el Obispo Coto y sus seguidores.

Dentro de las experiencias eclesiales "institucionales" en la gestión de la emergencia y la reconstrucción, tal vez la más innovadora y también exitosa se relaciona con el trabajo desplegado por el Consejo de Iglesias por las Emergencias y la Reconstrucción (CIPER), un ente interdenominacional de las Iglesias Protestantes (Metodista, Luterana, Menonita, Pentecostal, Nazareno), creado a la luz de las experiencias de los sismos de Cóbano y Alajuela en 1990, y con antecedentes que datan del Huracán Juana en 1988. En sí constituía, con la excepción de la Cruz Roja, la única instancia organizada de la sociedad civil costarricense cuya área de atención central fuesen las emergencias y los desastres.

Como instancia colectiva fue el punto de convergencia de múltiples donaciones materiales y financieras, tanto de las iglesias miembros y otras organizaciones eclesiales, como de organizaciones internacionales protestantes de financiamiento como lo son ICCO de Holanda, Diakonía de Suecia, Pan para el Mundo de Alemania, y el Consejo Mundial de Iglesias

Con la estrecha colaboración de organizaciones hermanas en Nicaragua (CEPAD) y Honduras (CCD) (las cuales proporcionaron apoyo humano, logístico y de transportes (camiones, jeeps y avioneta)), el CIPER, con la ayuda de 65 voluntarios, distribuyó más de 60 toneladas de socorro entre 43 poblaciones rurales y 1.725 familias en Limón y Turrialba, caracterizadas todas por su ubicación fuera de los centros de población y atención más importantes; o sea, en la periferia, zona rural y zonas más atrasadas del área de impacto.

Utilizando "guías" compuestos por personas con un conocimiento íntimo de las zonas afectadas logró entrar por caminos alternos a zonas incomunicadas por las rutas o caminos principales destruidos por el sismo. La distribución del socorro a las comunidades se hacía a través de organizaciones existentes, sean eclesiales (protestante o católica, indistintamente) o de bases, de acuerdo con el caso en cuestión. La base de la distribución fue por necesidad, no por credo ni afiliación. Similar estrategia fue utilizada durante las inundaciones de agosto.

En esencia, la clave del éxito de su gestión residía en la coordinación de esfuerzos y en su colaboración con diversas instancias, sean protestantes o no. Al considerar la etapa de emergencia y la de reconstrucción el CIPER concertó o concentró la ayuda de más de cuarenta instituciones distintas a nivel nacional e internacional

A través de un hábil manejo de las posibles reticencias y "antagonismos" entre las mismas iglesias protestantes y entre algunas de éstas y la Iglesia Católica (a la cual proveyó con una importante donación de socorro) logró, al calor de la coyuntura de emergencia, concentrar diversos esquemas de colaboración.

La experiencia de CIPER en la reconstrucción se fundamentó sobre los principios de amplitud, cooperación y colaboración, atendiendo a los grupos o poblaciones más rezagadas a través de las organizaciones de base y en concertación con ONGs e iglesias. Su obra se marcó por una línea de continuidad en la emergencia y la reconstrucción. En esta última trabajó primordialmente con las mismas comunidades atendidas durante la crisis, potenciando y consolidando así el trabajo con

las organizaciones locales y de base. También mantenía el criterio de "pobreza" y falta de acceso a otras ayudas más formales que indicaba su actuar en el socorro.

Concentrando su atención en la reconstrucción de viviendas colaboró en la provisión de 153 nuevas unidades a través de ocho proyectos distintos, en casi 20 poblaciones de diferentes zonas de la Región Atlántica, todas empleando la autoconstrucción a través de la participación directa de la población afectada y el respeto a tradiciones y materiales locales de construcción. En estos proyectos el apoyo de CIPER cubría desde el financiamiento y material hasta la provisión de alimentos por familia.